



Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

57196/2022/2.-

“COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. (EMPRESA CONTINUADORA DE COFCO ARGENTINA S.A.) c/E.N. -A.F.I.P. -RESO 20/22 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”.

///nos Aires, 17 de julio de 2025.- AMD

**Y VISTOS, CONSIDERANDO:**

I.- Que, por medio del [pronunciamiento](#) del 26/12/2024, el Sr. Magistrado de grado ordenó a la demandada que acompañara la prueba que motivó la presente incidencia, debiendo levantar el secreto fiscal respecto de la información relacionada con los proveedores.

Asimismo, le hizo saber que: “[r]especto de dichos terceros deberá acompañar la información pertinente en archivos autónomos e individualizados a los fines de proceder a la restricción en el sistema LEX100 de los mismos, con el objeto de restringir su visualización, pudiendo ser consultada únicamente por las partes del caso [...]”.

Por otra parte, y en atención a la vinculación existente con la prueba pericial contable que debería realizarse, también intimó a la demandada a acompañar los registros del libro de movimientos y existencias de granos ingresados por COFCO Argentina S.A., bajo la C.U.I.T. N° 30-70779108-6, en el período que comprendía las operaciones cuestionadas (1/2015 a 1/2018).

II.- Que, disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional apeló y [fundó](#) su recurso el 21/02/25, cuyo traslado fue [contestado](#) por la actora.

En síntesis, cuestionó la orden de levantamiento del secreto fiscal. Para hacerlo, recordó su carácter de orden público y sostuvo que no se trataba de un instituto sujeto a la discrecionalidad judicial.

A su vez, indicó que no se encontraban reunidos los requisitos excepcionales previstos por el artículo 101 de la ley 11.683 para dar lugar al levantamiento.

Citó la Disposición A.F.I.P. N° 98/2009 y manifestó que: “[l]a información solicitada por la actora se encuentra alcanzada por el secreto fiscal, en tanto está solicitando que el organismo brinde datos de tipo económico patrimonial respecto de terceros, la cual tampoco se encuentra incluida en ninguno de los supuestos de excepción [...] los terceros involucrados no revisten el carácter de parte en la presente controversia, ni tampoco han brindado su consentimiento expreso. A lo que cabe agregar, que aquella información relacionada con las operaciones impugnadas por la actora ya fue oportunamente acompañada en autos [...]”.

Por último, postuló que resultaba errada la postura del Juez de grado conectada con la restricción de esa información al público una vez que fuera





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

incorporada, habida cuenta que cualquier intromisión de terceros sería suficiente para producir una vulneración ilegítima.

III.- Que, previo al análisis de la cuestión planteada, corresponde destacar que: a) la actora en su [demanda](#) ofreció prueba informativa, en lo que aquí importa, en los siguientes términos: “[V]l.2.1. Solicito que se libre oficio a la AFIP-DGI, con el objeto de que [...] 2.- Informe si los Proveedores se encontraban incluidos y con matrícula vigente en el Registro Fiscal de Operadores de Granos durante los periodos fiscales en los cuales realizaron las operaciones cuestionadas con Cofco, y en su caso la categoría en la cual se encontraban inscriptos. En caso que informe que algún proveedor se encontraba suspendido o excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos durante los periodos fiscales en los cuales realizaron las operaciones impugnadas con Cofco, acompañe las constancias registrales correspondientes [...] 4.- Informe, con relación a la Resolución General (AFIP) N° 615 (sus modificatorias y complementarias), la situación que revestían los Proveedores observados en cada uno de los periodos en los que se confeccionaron las facturas. 5.- Indique si, en los periodos cuestionados, los Proveedores se encontraban exceptuados de sufrir retenciones. En caso afirmativo, acompañe las actuaciones que dieron lugar a la concesión del certificado de exclusión de retenciones y percepciones correspondiente. 6.- Informe si la AFIP abonó a los Proveedores los reintegros sistemáticos de las retenciones de IVA correspondientes a las operaciones cuestionadas. 7.- Acompañe copia de los legajos de cada una de las fiscalizaciones iniciadas a los Proveedores impugnados, en cuyo marco se realizaron las conclusiones que el fisco resume en el marco del expediente administrativo. 8.- Si otorgó autorizaciones a los Proveedores y corredores intervinientes en las operaciones cuestionadas para la emisión de cartas de porte así como también de sus correspondientes CTG. 9.- Si inició a los Proveedores fiscalizaciones para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En caso afirmativo, informe las fechas en las cuales los aludidos procesos fueron iniciados y si formuló reclamos de deuda o algún otro tipo de cuestionamiento y las fechas en las que las deudas o cuestionamientos fueron notificados. 10.- Si autorizó la registración de los boletos de compraventa de granos y/o de las Liquidaciones Primarias o Secundarias de Granos, según corresponda, relativos a las operaciones cuestionadas por la AFIP en autos. [...]” (páginas 62/63 del escrito inicial).

b) El 4/04/2023 la instancia de origen [admitió](#) la prueba referida en los siguientes términos: “[P]roveiendo la prueba ofrecida por la parte actora: [...] A LA INFORMATIVA: Líbrense los oficios solicitados, en los términos del art. 400 del CPCCN y, en su caso, en forma electrónica (mediante el DEOX) [...]”.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

c) El 23/09/2024 el Fisco Nacional expresó que la información detallada en el punto “a” del presente Considerando se encontraba alcanzada por el secreto fiscal (en los mismos términos que fueron indicados en el Considerando que antecede) y, el 4/11/2024, el Sr. Magistrado de grado proveyó lo siguiente: “[c]orresponde intimar a la parte demandada a que en el término de veinte (20) días que se le fijan al efecto acompañe la prueba que motivara la presente incidencia conforme fuera ya resuelto en la causa. A todo evento, la prueba que -a su entender- se encuentra alcanzada por el secreto fiscal, deberá ser acompañada en una presentación debidamente individualizada pudiendo el Juzgado, en todo caso, proceder a la restricción en el sistema LEX100 del escrito en cuestión, encontrándose su visualización restringida y pudiendo ser consultada únicamente por las partes del caso [...]”.

d) Contra lo así dispuesto, el 8/11/2024 el Fisco Nacional interpuso recurso de reposición con apelación subsidio, que fue rechazado por la instancia de grado el 6/12/2024.

d) Finalmente, el 11/12/2024 la accionada peticionó que se aclarara al respecto, circunstancia que motivó el dictado de la providencia aquí discutida.

**IV.-** Que, frente al escenario descripto, debe dejarse sentado que las expresiones de la parte actora en su contestación de agravios, conectadas con la oportunidad en la cual el Fisco Nacional manifestó la existencia del secreto fiscal en la especie y las incidencias provocadas a partir de ello, merecen las siguientes precisiones.

Inicialmente, ha de destacarse que bien es cierto que, como principio, concluida una etapa procesal (firme y consentida), ésta no puede ser revisada o volverse sobre ella en virtud del principio de preclusión, bajo riesgo de afectar la seguridad jurídica buscada por tal principio o bien de perturbar la defensa en juicio de la parte contraria (en sentido concordante, esta Sala, *in re*, “E.N. -I.N.T.I. -LIC 8/02(E.767147/02) y LIC 01/01(E.765073/00) c/Decover S.A. s/contrato administrativo”, Expte. N° 16.356/2005, sentencia del 21/10/2014).

Y aún cuando el efecto genérico de la preclusión es poner un límite al ejercicio de determinadas facultades procesales, ya que ella se produce por consumación de una facultad procesal o por pérdida de la no ejercitada en tiempo propio, o cuando se pasa a un distinto estado del trámite (cfr. esta Sala en la causa precedentemente citada y sus citas), ha de precisarse que tales principios reconocen y requieren su prudente modulación cuando como aquí ocurre, se encuentran afectados principios de orden público que involucran prerrogativas de terceros ajenos al pleito y no ha mediado un pronunciamiento judicial expreso y fundado al respecto, cuya firmeza genere la aludida preclusión e imponga su consiguiente acatamiento.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

V.- Que en mérito a lo hasta aquí expresado, es claro que en el caso debe adoptarse una solución de especie, que se encuentre ajustada a la normativa vigente, y tome debida razón de su interpretación y aplicación con ajuste a las pautas enunciadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en situaciones análogas.

En este orden, debe recordarse que el artículo 101 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.) establece que: *“[L]as declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignent aquellas informaciones, son secretos. Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos. Las informaciones expresadas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia, o en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen, o cuando lo solicite el interesado en los juicios en que sea parte contraria el Fisco Nacional, provincial o municipal y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros [...]”*.

Al respecto, es necesario apuntar que se ha establecido que el sentido de la previsión consagrada en el actual artículo 101 de la ley 11.683: *“[e]s llevar tranquilidad al ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que se formule ante la DGI será secreta. Se trata, pues, de la seguridad jurídica como medio decisivo establecido por el legislador para facilitar la adecuada percepción de la renta pública [...]”* (cfr. Dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos fueron compartidos por el Alto Tribunal en la causa “Olivera, Gustavo Eduardo c/E.N. –A.F.I.P. s/amparo ley 16.986”, sentencia de fecha 12/11/2020, y sus citas, registrado en *Fallos*: 343:1663) y que: *“[T]al disposición reconoce indudable fundamento constitucional y solo admite excepción en los casos en que media conformidad de los propios interesados [...]”* (cfr. Causa: “Cusenier Gran Destilería de Buenos Aires, S.A. c/Nación”, registrado en *Fallos*: 248:627).

Asimismo, el Alto Tribunal señaló que tal previsión legal no solo alcanza a las declaraciones o manifestaciones que hayan podido formular los contribuyentes ante el órgano administrativo competente, sino que comprende también a los expedientes, actos, resoluciones o documentos en los que consten o puedan constar tales declaraciones o manifestaciones (cfr. Dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, cuyos





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

fundamentos fueron compartidos por el Alto Tribunal en la causa: “Olivera, Gustavo Eduardo”, ya citada y sus citas).

Ahora bien, al ejercer su función interpretativa sobre los artículos 101 de la ley 11.683 y 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Corte Suprema sostuvo que correspondía: *“[r]evocar la sentencia que basándose en los supuestos establecidos en el art. 101 de la ley 11.683, ordenó a la AFIP levantar el secreto fiscal para informar el carácter de la demandada frente al impuesto al valor agregado y si había empleado el crédito fiscal contenido en determinadas facturas emitidas por la actora, pues una correcta interpretación de dicha norma indica que solo es posible el acceso en los casos en que el propio contribuyente, en cuyo interés se estableció el secreto, es quien pidió o consintió expresamente que se trajera como prueba en el juicio contra terceros sus declaraciones presentadas ante el organismo previsional, lo que no se verifica en la causa pues el a quo ordenó a la AFIP prescindir del secreto fiscal basándose únicamente en la falta de objeción del demandado a la producción de esta prueba durante la audiencia del art. 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mas no -como era menester- en su pedido o consentimiento expreso [...]”* (cfr. Dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en *Fallos*: [331:2305](#), el subrayado no corresponde al original).

En estas condiciones, no corresponde convalidar la posición que intenta sostener la parte actora basada en una genérica preclusión procesal (constituida en el caso, con sustento en la falta de oposición, mas también en la ausencia del pronunciamiento expreso y fundado que se requiere sobre la materia involucrada), a poco que se repare en que, según el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia en los precedentes referidos anteriormente, resulta inadmisibles vulnerar el secreto fiscal de manera tácita (lo que ocurriría si se expresara que se encuentra vencida la oportunidad para cuestionar el levantamiento ordenado por la instancia de grado).

A mayor abundamiento, la tesitura del Fisco Nacional se advierte en el caso atendible toda vez que, a través de la decisión cuestionada, se le requiere que divulgue informaciones, documentos, manifestaciones y datos de terceros contribuyentes (en la especie, los proveedores sobre los que pretende la accionante que se produzca la prueba informativa), que implican develar contenidos referentes a su situación económica y/o financiera, en conjunto con las posibles declaraciones o manifestaciones que ellos hubieren formulado al organismo recaudador.

A todo evento, debe dejarse sentado que la salvedad formulada en la providencia cuestionada, conectada con la posibilidad de restringir en el sistema







Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

informático del Poder Judicial de la Nación las actuaciones no justifica ni convalida el temperamento adoptado, toda vez que las limitaciones impuestas para resguardar secreto fiscal conducen a concluir que la tutela solo puede considerarse efectivizada si esa información se mantiene entre el organismo recaudador y los sujetos obligados a proporcionarla (lo que no ocurriría si terceros -como lo son las personas con acceso a las constancias restringidas diferentes a los sujetos protegidos- acceden a los datos referidos).

Las circunstancias descriptas, determinan la admisión del recurso de la parte demandada y, en consecuencia, la revocación de las providencias del 4/04/2023 (en cuanto ordena producir la prueba informativa peticionada por la actora y detallada en el punto “a” del Considerando III de este pronunciamiento); 4/11/2024 y 26/12/2024.

**VI.-** Que, por último, en atención a la forma en la que se decide y las particularidades que presenta la incidencia, corresponde distribuir las costas de esta instancia en el orden causado (cfr. artículos 68, segunda parte y 69 del C.P.C.C.N.).

Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal **RESUELVE: 1º)** admitir la apelación del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar las providencias del 4/04/2023 (en cuanto ordena librar la prueba informativa peticionada por la actora y detallada en el punto “a” del Considerando III de este pronunciamiento); 4/11/2024 y 26/12/2024, y **2º)** distribuir las costas de esta instancia en el orden causado (cfr. artículos 68, segunda parte y 69 del C.P.C.C.N.).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

